

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE NRO: 126597/2017

AUTOS: "P.A.C.C. S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA"

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

I.- Que por resolución nro. 1807/17 se desestimó la impugnación presentada por el contribuyente y en consecuencia confirmó la determinación de deuda por aportes y contribuciones, generadas en virtud de la O.I. 1.074.766 se dirige el recurso de apelación de fecha 4/7/2017 obrante en las actuaciones digitalizadas.

II. Previo a la remisión de las actuaciones, ha de señalarse que por nota 09/10/2017, el ente recaudador da cuenta que el apelante no acreditó el depósito de la deuda, según lo preceptuado por la suma reclamada, cuestión que habrá de ser en analizada liminarmente de manera de dilucidar la admisibilidad formal del remedio intentado.

En este orden, es oportuno precisar que, el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades, que si bien el cumplimiento del recaudo apuntado resulta indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, sin que ello importe una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos. S.A. s/Impugnación actas de inspección", sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287, consid. 10).

Las particulares circunstancias de esta causa en que, como se verá, la accionada persigue el cobro de una deuda de muy vieja data, en su mayor parte ya prescripta, permiten encuadrar al sub examine en la última de las hipótesis de excepción indicadas en el párrafo anterior, por lo que corresponde declarar habilitada esta instancia y conocer del caso.

III. Despejados los óbices formales a la procedencia del remedio intentado, cabe circunscribir el examen a la cuestión litigiosa a resolver esto es –más allá de las cuestiones desarrolladas en el escrito de apelación-, en primer lugar, si se encuentra o no prescripta la acción ejercitada por el organismo para percibir los aportes y contribuciones reclamados.

Las actuaciones tuvieron su inicio con la Orden de Intervención. nro. 1.074.766, con el objeto de confrontar los datos informados por el denunciante con los registrados, que concluye con la determinación de una deuda de por la falta ingreso de los aportes y contribuciones en las declaraciones juradas correspondientes a los períodos 07/2002 al 02/2005, todo ello motivado en la sentencia dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo nro. 29 en la causa 31833/2006, in re "TRAUT CARLOS HONORIO c/ P.A.C.C. S.A. s/ DESPIDO".

Ha de señalarse que conforme de las constancias obrantes en autos, las actuaciones tienen su origen en la comunicación cursada la Secretaría del juzgado referido ut supra en echa 01/12/2008; verificado el incumplimiento declarado, se dio apertura al cargo notificando al contribuyente con fecha 16/10/2014 en los términos del art. 100 inc. e) de la ley 11.683.

En ese cometido y tal como ha sostenido el tribunal en casos análogos al presente (ver sentencia definitiva nro. S.D. nro. 111693 del 20.3.06 en la causa 13516/05 "Maitor SRL c/AFIP-DGI s/impugnación de deuda"), se destaca que el organismo cuenta con amplias facultades de control y fiscalización cuyo ejercicio es independiente del accionar de los particulares afectados. En efecto, aún sin que medie denuncia del trabajador o sentencia judicial que reconozca el carácter laboral de una relación, es común que la D.G.I. labre actas y formule cargos contra presuntos empleadores deudores, de modo que el fraude que este pueda cometer no constituye un impedimento para su accionar. Por lo demás, en caso de mediar cuestionamiento del administrado contra la resolución que desestimó su impugnación, compete a este Tribunal resolver sobre el fondo del asunto, aunque para ello sea necesario dilucidar si corresponde admitir o excluir del ámbito del derecho laboral a la relación jurídica habida entre las partes.

Por otra parte, en lo que hace al cómputo de la prescripción liberatoria habrá de recordarse lo dispuesto por el art. 4017 C.C. –vigente al tiempo en que se devengó la obligación de pago-, en cuanto alude al tema en los siguientes términos: "por solo el silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de toda obligación. Para esta



Poder Judicial de la Nación

prescripción no es preciso justo título ni buena fe”. De ello se desprende que la eficacia de la prescripción “es independiente de la buena o mala fe del deudor”, como afirma Llambías en el Tratado de Derecho Civil - Obligaciones III, Ed. Perrot, pág. 311, quien agrega: “A diferencia del derecho canónico en que la prescripción sólo es alegable por el deudor de buena fe..., en nuestro derecho ese es un factor irrelevante”, ponderando ese criterio legal “por cuanto el fundamento de la prescripción es la utilidad social que resulta igualmente servida, aunque el deudor tenga conciencia de la subsistencia de su deuda, o sea tenga mala fe”.

Así las cosas, el cómputo que se trata de las acciones por cobro de contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social se produce a los diez años de su devengamiento con arreglo a lo dispuesto por el primer párrafo del art. 16 de la ley 14236, de manera que, en el sub examine, resultan alcanzadas por la excepción los créditos originados con anterioridad a los diez años previos al reclamo.

En otro orden cabe destacar que la conducta del acreedor no es ajena al vencimiento del plazo de la prescripción liberatoria, puesto que -como ocurre con habitualidad- en ejercicio de sus facultades de fiscalización y verificación, bien pudo haber promovido el reclamo que ahora persigue en tiempo oportuno con prescindencia de la existencia o no de una causa judicial interpuesta por el trabajador de la que tomo conocimiento 6 años antes de cursar la notificación. En otras palabras, no ha sido acreditado que el organismo recaudador ejerció en debida forma las atribuciones que le son propias o que, habiéndolo hecho, no pudo llegar a un resultado acertado en virtud del ocultamiento del empleador (C.N.Civ. Sala C, 6.5.86, L.L. 1987 - A - 241 y E.D. t. 119 pág. 265).

En síntesis, sin que ello importe alentar actitudes evasivas de los obligados al depósito de aportes y contribuciones, ha de considerarse que la aplicación del derecho vigente a las constancias de la causa, cimentado en la preservación del valor de seguridad jurídica al que apunta el instituto de la prescripción liberatoria, no permite hacer excepción a la reglas contempladas por el citado Código cuyos alcances, en cuanto aquí interesa, no han perdido virtualidad a partir de la reforma aprobada por ley 26.994.

Por lo arriba expresado, cabe hacer lugar a la prescripción opuesta por los créditos reclamados por períodos anteriores a los diez años previos al 16/10/2014, fecha en la que los instrumentos que dieron origen a las presentes actuaciones fueron notificados al INSSJyP. De tal modo, se declaran prescriptos los créditos devengados hasta el 16/10/2004.

Por ello el Tribunal **RESUELVE**: 1) declarar formalmente admisible el recurso deducido; 2) hacer lugar al mismo y admitir la prescripción liberatoria opuesta por la parte recurrente por los créditos devengados con anterioridad a los diez años previos al reclamo formulado por el organismo, por lo que corresponde dejar sin efecto la resolución cuestionada en los términos y con el alcance referido en el considerando III in fine; y 3) Costas por su orden (arts. 68 CPCCN.). Protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).

